CONGRESO DE LA REPÚBLICA
AREA DE TRAMITE Y DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS
28 DIC. 2022
RECIBIDO
Firma: Horas: 17:00h.

DICTAMEN RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY N° 0001/2021-G.L, QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 108-C DEL CÓDIGO PENAL, CON EL INCREMENTO DE LA PENA

COMISIÓN DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
Período anual de sesiones
2022 - 2023

Señor Presidente:

Ha ingresado para dictamen de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos el **Proyecto de Ley N° 0001/2021-GL,** Ley que Modifica el Artículo 108-C, literal c) del Código Penal, con el incremento de la Pena, Proyecto de Ley presentado por la Municipalidad Distrital de Comas, en ejercicio de las facultades que le confiere el Artículo 107° de la Constitución Política de Perú.

Después del análisis y debate correspondiente, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, en su Décima Sesión Ordinaria, celebrada el 23 de noviembre de 2022, acordó por **UNANIMIDAD**, la **NO APROBACIÓN** del presente dictamen.

Con el voto a favor de los congresistas presentes: GONZA CASTILLO Américo, BALCAZAR ZELADA José María, PAREDES GONZALES Alex Antonio, ALVA PRIETO María del Carmen, CERRON ROJAS Waldemar José, CRUZ MAMANI Flavio, ECHAIZ DE NUÑEZ IZAGA Gladys Margot, GUERRA GARCÍA Campos Hernando, JUÁREZ GALLEGOS Carmen Patricia, LUQUE IBARRA Ruth, MORANTE FIGARI Jorge Alberto, MOYANO DELGADO Martha Lupe, MUÑANTE BARRIOS Alejandro, SOTO PALACIOS Wilson, VENTURA ANGEL Héctor José y LIMACHI QUISPE Nieves Esmeralda[1].

I SITUACIÓN PROCESAL

a. Antecedentes procedimentales

El Proyecto de Ley N° 0001/2021-GL fue presentado el 03 de Agosto de 2021, siendo decretado a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos el 20 de agosto de 2021, en calidad de única comisión dictaminadora.

b. Antecedentes Parlamentarios:

Efectuado la búsqueda sobre los antecedentes parlamentarios hemos encontrado el Proyecto de Ley 3179/2013-CR, de fecha 18 de febrero de 2014, propuesto por el Congresista Elías Rodríguez Zavaleta en representación de la Bancada Concertación Parlamentaria, decretada a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos el 20 de febrero de 2014, mediante el cual, se proponía incorporar la tipificación del delito de sicariato al Código Penal, estableciendo en su propuesta la pena privativa de libertad no menor

[1] *Congresista accesitaria de la agrupación política "Perú Democrático" en reemplazo de la congresista CHAVEZ CHINO Betssy Betzabet.*

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: PAREDES GONZALES Alex Antonio FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 19/12/2022 16:04:00-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: CRUZ MAMANI Flavio FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 23/12/2022 15:32:54-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: MUÑANTE BARRIOS Alejandro FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 28/12/2022 10:02:34-0500

de 20 años.

Asimismo, con relación al aumento de las condenas de manera similar se encontró el Proyecto de Ley 5159/2020-CR, de la Congresista Arlette Contreras Bautista.

Es de acotar, que la modificación del tipo penal y la gradualidad de la pena se incorporo al Código Penal por Decreto Legislativo N° 1181 Artículo 1, publicado el 27 de julio de 2015

c. Opiniones e informaciones solicitadas

Se ha solicitado opinión a las siguientes instituciones:

PROYECTO DE LEY	OFICIO	INSTITUCION	FECHA
0001/2021-GL	Of. P.O. N° 007-2021-2022-CJYDDHH/CR	Ministro de Justicia y Derechos Humanos	14/09/2021
	Of. P.O. N° 008-2021-2022-CJYDDHH/CR	PODER JUDICIAL	14/09/2021
	Of. P.O. N° 009-2021-2022-CJYDDHH/CR	MINISTERIO PÚBLICO	14/09/2021
	Of. P.O. N° 010-2021-2022-CJYDDHH/CR	DEFENSOR DEL PUEBLO	14/09/2021
	Of. P.O. N° 316-2021-2022-CJYDDHH/CR-REITERATIVO	Ministro de Justicia y Derechos Humanos	02/12/2021
	Of. P.O. N° 317-2021-2022-CJYDDHH/CR REITERATIVO	MINISTERIO PÚBLICO	02/12/2021
	Of. P.O. N° 318-2021-2022-CJYDDHH/CR REITERATIVO	DEFENSOR DEL PUEBLO	02/12/2021

II.- CONTENIDO DE LAS PROPUESTA

- **El Proyecto de Ley N° 0001/2021-GL**, tiene por objeto modificar el artículo 108-C, del Código Penal, con el incremento de la Pena.

El proyecto de Ley, materia de análisis propone modificar el Artículo 108-C, que reeemplaza la condena de pena privativa de libertad no menor de veinticinco años y con inhabilitación establecida en el numeral 6 del artículo 36, por cadena perpetua, sin modificar el tipo penal, no obstante, lo hace

extensivo a los participantes directos, intermediarios y a los autores intelectuales, con la misma condena.

Por otro lado, elimina la calificación de agravantes como el normal proceso de gradualidad de la pena.

Asimismo, en la exposición de motivos, el Proyecto de Ley, hace un analisis de la consecuencia de la Ley como mecanismo persuasivo en la comisión del delito, mencionando para tal efecto, a los juristas y especialistas en materia penal.

Finalmente, el proyecto es una iniciativa merituada con base al ejercicio del derecho de iniciativa en la formación de leyes que confiere el artículo 107de la Constitución Política del Perú, cuyo contenido se encuentra vinculado al tema de Justicia, por lo que su estudio y dictamen corresponde en efecto a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

III.- MARCO NORMATIVO

III.1. Legislación Nacional

- Constitución Política del Perú de 1993, publicado en el diario oficial El Peruano con fecha 30 de diciembre de 1993
- Decreto legislativo 635 que aprueba el Código Penal, Artículo 108-C.
- Reglamento del Congreso de la República.

III.2. Legislación comparada

En Chile el sicariato es la persona que asesina por encargo, a cambio de una compensación económica previamente pactada, está comprendida como una de las modalidades de homicidio calificado, en el artículo 391, circunstancia segunda, del Código Penal. La pena aplicable es de presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo (15 años hasta 20 años, o más).

En Colombia el Código Penal en el Artículo 103 desarrolla el tipo pnela del delito de homicidio con prisión de trece (13) a veinticinco (25) años. No obstante, la figura agravada de sicariato lo desarrolla en el articulo 104 Inc. 4. Por precio, promesa remuneratoria, ánimo de lucro o por otro motivo abyecto o fútil. La pena será de veinticinco (25) a cuarenta (40) años de prisión.

III.3. Normas convencionales

DICTAMEN RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY N° 0001/2021-G.L, QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 108-C DEL CÓDIGO PENAL, CON EL INCREMENTO DE LA PENA

Nuestro País reconoce como instancia supranacional a la Corte Interamericana de Derechos Humanos CIDH.

El artículo 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, el artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 (el que reproduce el art. 11 antes citado) y el artículo 7 del Convenio Europeo de 1953, aluden al derecho internacional.

El artículo 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

El principio de legalidad contiene cuatro garantías inalienables e inviolables, que
buscan evitar la arbitrariedad judicial y la afectación a la seguridad jurídica:

a.- **Garantía criminal** o conocida como ***nullum crimen sine lege***.- prohíbe procesar o investigar al ciudadano por conductas que no estén determinadas por ley con anterioridad al hecho.

b.- **Garantía penal** o ***nulla poena sine lege***.- , imposibilita sancionar con pena o imponer mayor pena, que la fijada por ley con anterioridad para castigar conducta.

c.- **Garantía jurisdiccional** o ***nulla poena sine legale juditium***.- no es posible ejecutar pena o medida se seguridad, si previamente no ha sido impuesta por juzgado competente, conforme al procedimiento establecido en la norma procesal y con anterioridad a los hechos, y ésta sea firme.

d.**- Garantía de ejecución.** - la ejecución de la pena impuesta debe ser acorde con los procedimientos previamente establecidos por ley.

A su vez para que éstas tengan efectivo cumplimiento, se establecieron cuatro subprincipios:

- **Reserva de ley.-** (lex scripta) Los ilícitos e infracciones, como sus penas o medidas de seguridad deben estar contenidas en una ley, convirtiendo a este principio en la base del Estado democrático.

- **Taxatividad.** – (lex certa) la máxima determinación posible de las conductas punibles y sus sanciones, para una adecuada subsunción, libre de equívocos.

- **Prohibición de la analogía.** – (lex stricta) queda proscrita la aplicación extensiva de la ley en desmedro de los derechos del imputado.

- **Proscripción de retroactividad.** – (lex previa) la prohibición de aplicar la nueva norma a un hecho acabado. La retroactividad de la ley, sólo es siempre y cuando le favorezca al procesado.

IV.- ANALISIS DE LA PROPUESTA LEGISLATIVA

4.1. ANALISIS TÉCNICO

- **El Proyecto de Ley N° 0001/2021-GL**, tiene por objeto modificar el artículo 108-C, del Código Penal, que reeemplaza la condena de pena privativa de libertad no menor de veinticinco años y con inhabilitación establecida en el numeral 6 del artículo 36, por cadena perpetua, sin modificar el tipo penal, no obstante, lo hace extensivo a los participantes directos, intermediarios y a los autores intelectuales, con la misma condena.

  La propuesta en comparación al texto vigente puede apreciarse en el cuadro que se muestra a continuación:

Texto actual del Código Penal	Propuesta de modificación

Artículo 108-C.- Sicariato El que mata a otro por orden, encargo o acuerdo, con el propósito de obtener para sí o para otro un beneficio económico o de cualquier otra índole, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de veinticinco años y con inhabilitación establecida en el numeral 6 del artículo 36, según corresponda. Las mismas penas se imponen a quien ordena, encarga, acuerda el sicariato o actúa como intermediario. Será reprimido con pena privativa de libertad de cadena perpetua si la conducta descrita en el primer párrafo se realiza: 1. Valiéndose de un menor de edad o de otro inimputable para ejecutar la conducta. 2. Para dar cumplimiento a la orden de una organización criminal. 3. Cuando en la ejecución intervienen dos o más personas. 4. Cuando las víctimas sean dos o más personas. 5. Cuando las víctimas estén comprendidas en los artículos 107 primer párrafo, 108-A y 108-B primer párrafo. 6. Cuando se utilice armas de guerra.	**Artículo 108-C.- Sicariato** El que mata a otro por orden, encargo o acuerdo, con el propósito de obtener para sí opara otro un beneficio económico o decualquier otra índole, será reprimido con penaprivativa de libertad **de cadena perpetua** y con inhabilitación establecida en el numeral 6del artículo 36, según corresponda. Las mismas penas se imponen a quien ordena, encarga, acuerda el sicariato o actúa como intermediario. **La misma pena será aplicable al que en forma directa o por intermediación encargue u ordene la realización de este delito** **El que cometa este tipo de delito no podrá acogerse al derecho de gracia.**

4.2. ANALISIS SOBRE LA NECESIDAD, VIABILIDAD Y OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA LEGISLATIVA.

El Proyecto de Ley, propone incorporar al Código Penal el delito de Homicidio Calificado bajo la modalidad de Sicariato, conocido en la doctrina penal como homicidio por encargo a sueldo, hoy en día el asesinato a cambio de la entrega de un dinero se ha constituido en fenómeno criminal que viene perjudicando terriblemente a nuestra sociedad.

El tipo penal de sicariato, es en la actualidad una de las figuras típicas mas comunes que inclusive incluye a menores de edad, con autores intelectuales de por medio, razón mas que suficiente que sustenta su tratamiento, independientemente de la pena que se pueda incrementar.

La iniciativa legislativa busca endurecer la pena o incrementarla en el delito

del sicariato en nuestro Código Penal, escuchando comentarios de autoridades, funcionarios y lideres sociales, políticos, religiosos y medios de comunicaciones anunciar que se debe aumentar las penas de los autores del sicariato.

En la exposición de motivos la propuesta legislativa busca generar un efecto disuasivo ante un problema que se está volviendo incontrolable en nuestro país; servirá como una herramienta para que los operadores de justicia puedan cumplir con su rol con la sociedad que es generar la paz y tranquilidad.

Es importante señalar que muchos juristas y especialistas en Derecho Penal reconocen esta nueva modalidad de homicidio agravado denominado Sicariato, figura que en los últimos años se viene desarrollando en toda América Latina, particularmente en Ecuador, Colombia, Argentina y el Perú, que tiene sus orígenes en el delito de tráfico ilícito de drogas; atentando de manera directa contra la sociedad, específicamente contra el derecho a la vida.

El Sicariato es un fenómeno social que por sus implicancias y consecuencias afecta el derecho a la vida, por la crueldad inhumana con la que se comete y por mercantilizar la vida de las personas, podría, incluso ser calificado como un delito de lesa humanidad y por ello debe ser juzgado conforme a la magnitud del hecho punible.

Cabe mencionar que, CARRIÒN M. Fernando en su Obra "El Sicariato: ¿Un homicidio calificado? Revista Latinoamericana de Seguridad Ciudadana N° 8, Quito – Ecuador, señala que el sicariato es una institución compleja que encarna un sistema Inter delincuencial con ribetes propios en el que aparece una organización criminal que, primero mata por encargo a cambio de una compensación económica y luego se convierte en una instancia autónoma de control de territorios, instituciones y sociedades.

El avance del crimen por encargo preocupa a los expertos, quienes aseguran que el sicariato comenzó con delitos relacionados al narcotráfico y ahora se ven asesinatos por disputas de bandas rivales o incluso por temas domésticos, una herencia o divorcio, etc.; es así que el incremento del sicariato en nuestro país es alarmante y asciende aproximadamente a 400% entre el año 2020 y 2021; asimismo, los lugares en que más muertos se han registrado producto de esta actividad delictiva son el Callao, La Victoria, Comas y San Juan de Lurigancho; situación que nos debe llamar la atención a todos.

Además señala el análisis y estudio que realiza sobre el problema del Sicariato en el Perú, el Abogado Mario Humberto Ortiz Nishihara:

"Es importante señalar que el homicida por encargo, lesiona un bien jurídico máximo en Toda sociedad: la vida humana". Pero igualmente lesiona otros valores relacionados rotundamente con la vida del hombre: como la dignidad humana, al poner un pretendido precio a un bien jurídico invaluable, como es la existencia de cualquier persona, con desprecio absoluto de todo lo que ello significa. Este tipo de homicidio, como debemos darnos cuenta, constituye un crimen nefasto ignominioso, radicalmente ofensivo de la dignidad humana, puesto que proviene de un pretendido trato o negocio que pretende comprar y vender la existencia de una determinada persona, como si se tratase de una mercadería; es por eso que le añade al terrible desvalor del homicidio, un factor más: el ponerle precio a una vida humana, como si se tratase de la venta de un pavo o un lechón para sacrificar, al que se puede comprar y vender en el mercado.

Asimismo, el sicario y su coautor, se atreven así a disponer de la vida de alguien, a cambio de dinero, concertando un trato como si la vida humana fuera una mercancía. El sicario asigna un supuesto precio a la existencia de cualquier persona y con ello su accionar resulta profundamente dañoso de la dignidad humana, del orden natural y del orden jurídico, pues en esa forma, la vida humana es asumida como una cosa, de la cual el mediato (*el autor intelectual, el comprador de esa vida)* disponen, en una forma
Que solo podemos calificar como máximamente perversa, pues el homicida lucra, negocia, obtiene un beneficio económico ilícito del homicidio. Un accionar criminal que trasluce un móvil de los más radicalmente innobles: *el sicario asesina a cambio del precio que le ha puesto a una vida humana.*

Poner un precio a la vida humana, al disponer de ella como cualquier mercancía, se reduce a la existencia humana y se la degrada a extremos increíbles, de una simple cosa, que puede ser comercializada en el mercado; por lo cual, desde la perspectiva de la dignidad humana, el sicariato llega a igualar o incluso a superar a la tortura y al genocidio, en cuanto al desvalor de la acción que implican, pues por lo común el accionar del torturador o el genocida pretende ampararse o alegar algún supuesto fin social, cultural o ideológico (*que por cierto no los justifica en modo alguno;* Pero en cambio el accionar del sicario solo se explica en razón a un vil contrato y espurio por el cual se pretende comprar y vender la vida de una persona; siendo que el sicario procede simple y brutalmente porque su "negocio criminal" y de lesa humanidad es cegar la vida de alguien a cambio de un pretendido precio".

Menciona además que, el sicariato o asesinato por dinero es una modalidad colombiana copiada por las bandas criminales de nuestro país y cobrado hoy en día, una notoria relevancia con particularidades perversas en muchos casos por la participación de adolescentes menores de 18 años; utilizados cada vez más por pandillas precarias y organizaciones criminales conducidas por delincuentes adultos para cumplir "servicios" de asesinato contra ciudadanos, cobrar cupos de extorsión, eliminar a delincuentes competidores, entre otros.

El delito del sicariato según el Mayor Guillermo Rodríguez del Grupo de Operaciones Especiales GOE Policía Nacional del Ecuador, señala que:

> "Este delito cuenta con antecedentes históricos, desde la época de la invasión de los Romanos a Palestina, desde ahí viene el concepto de "sicario" como la "daga" que se empleó en esa época. Actualmente, la gran influencia viene de Colombia, tiene que ver con el narcotráfico en la época de Pablo Escobar en los años ochenta, donde niños de las periferias de Medellín eran utilizados para cobrar venganzas o para eliminar a algunas personas. Son célebres en Colombia, jueces que fueron asesinados por la droga porque estaban atentando contra los intereses de los narcotraficantes. En México se tiene a "Los Zetas", que son organizaciones delictivas que se han dedicado exclusivamente al sicariato. Los carteles tienen inclusive su propia manera de marcar territorio y de victimar a la gente, diferenciándose en la forma de sembrar el terror y el miedo".

Asimismo es preciso señalar que la legislación Ecuatoriana después de varios años de debate ha logrado incorporar esta figura jurídica del sicariato u homicidio por encargo en su Código Orgánico Integral Penal (COIP) en su Artículo 143 reprimiendo este delito con una pena privativa de la libertad de 22 a 26 años.

La problemática de la inseguridad ciudadana debe merecer la atención del Estado en su conjunto en todos los niveles de gobierno desde la función que corresponda; porque en la actualidad vemos que la delincuencia ha ganado terreno a nuestra Policía Nacional, es inconcebible que los sicarios se publiciten vía las redes sociales, tarjetas personales, etc. A la vista y paciencia de todos. Según los medios de comunicación se ha informado que en Trujillo existen escuelas de formación de sicarios y producto de ello las estadísticas nos muestran que un centenar de personas en el año 2013, han fallecido producto del sicariato en el País; denominados también sicarios,

matones a sueldo, asesinos por encargo y profesionales de limpieza humana son algunos nombres usados por los delincuentes que cobran diversas tarifas para eliminar a los adversarios de quién tenga dinero para pagar por ello; y en la actualidad vemos que este problema sigue acrecentándose; lo que nos debe preocupar a todos porque no se trata de una percepción ciudadana ni cuestión que debe interesar sólo a las autoridades, sino que es una realidad cuya solución involucra a todos.

4.3. ANALISIS DEL MARCO NORMATIVO Y EFECTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMA

La legislación nacional en el Decreto Legislativo 635 aprueba el Código Penal, y su modificatoria, mediante Decreto Legislativo N° 1181 Artículo 1, publicado el 27 de julio de 2015, incorpora el tipo penal de "sicariato" y establece un criterio de gradualidad de la pena que tiene como un mínimo de veinticinco (25) años hasta la cadena perpetua en su figura agravada.

La propuesta legislativa "endurece la pena" en su acepción más simple y evita que el magistrado pueda aplicar de manera gradual, atendiendo la participación del infractor en la comisión del delito, lo que implica la sobre criminalización e incremento punitivo de delitos que a la postre no resulta ser una respuesta adecuada frente al aumento de la criminalidad.

En la actualidad existe la pena de cadena perpetua en el delito de sicariato en su forma agravada, por tanto, desde la óptica de la política criminal ésta ya se encuentra en nuestro ordenamiento penal, sin descuidar que, como Estado estamos obligados de atender al ser humano como tal y no como una cosa o animal, sino que, siendo un ser eminentemente social, es deber imperativo resocializar al infractor; por lo que cabe la pregunta. ¿Se podrá resocializar al que se encuentra sentenciado de por vida?, o peor aún si éste ya fue ejecutado con pena de muerte?

El rol del Estado es justamente lograr que la sociedad fomente una cultura de paz, para ello debe implementar una serie de políticas de Estado multisectorial que permita una nueva sociedad, trabajando de manera preventiva y no reactiva.

Del Análisis del Costo Beneficio resulta mas rentable para el Estado la construcción de albergues infantiles, guarderías, centros de esparcimiento y fomento del deporte en sus diversas disciplinas para evitar que el abandono de familias disfuncionales o abandonos a menores de edad sea el insumo para la implementación de una diversidad de delitos como en este caso el de "sicariato".

Por lo significativo de la propuesta y siendo que las demás opiniones institucionales de diversas entidades del sector público, consideramos que la propuesta legislativa contenida en el Proyecto de Ley N.° 001/2021-GL

resulta no viable

V OPINIONES RECIBIDAS

El Proyecto de Ley N° 0001/2021-GL, ha recibido las siguientes opiniones:

5.1.- PODER JUDICIAL

Mediante Oficio N° 003921-2022-SG-CS/PJ de fecha 24 de Noviembre del 2021, el señor WILLIAN CARLOS PEÑALOZA MATIAS, Secretario General de Corte Suprema de Justicia de la República, que contiene el informe N°0185-2021-GA-P-PJ, dando opinión al Proyecto de Ley 0001/2021-GL, en los siguientes términos:

5.1.1. ANÁLISIS

ACERCA DE LA SOBRECRIMINALIZACIÓN Y LA NECESIDAD DE UNA ADECUADA POLÍTICA CRIMINAL.

a) En primer lugar, se debe señalar que, en el Perú, como consecuencia de la creciente inseguridad ciudadana, la criminalización primaria se ha manifestado en una tendencia a la sobre criminalización en la legislación penal. Una experiencia, en el sentido, estuvo representada por la decisión del Congreso de la República de delegar facultades legislativas en el Poder Ejecutivo a través de la Ley N. 26950, la misma que originó la expedición de once decretos legislativos que creaban delitos, aumentaban las penas y otros más de la misma índole, que, en general, debilitaban el debido proceso.

b) Al respecto no debemos olvidar que la criminología, la política criminal y la dogmática penal son autónomas en cuanto a campos científicos, los mismos que se encuentran más ligados a una unidad funcional en el complejo del procedimiento de realización del derecho penal. En este proceso decisivo, la criminología aporta al conocimiento empírico sobre el surgimiento de la criminalidad y la lucha contra ella. Asimismo, la política criminal busca transformar la experiencia criminológica en opiniones y estrategias concretas, asumibles por el legislador y los poderes públicos. Además, la dogmática penal presenta las posibilidades de configuración del derecho para fines políticos criminales. Una vez que la decisión ha obtenido vigencia Jurídica por obra del legislador, la sistematización y la interpretación son tarea de la dogmática penal.

c) De este modo, la política criminal se ocupa, en primer término, de efectuar el estudio crítico y prospectivo de las normas penales y de las institucionales que se encargan de la oportuna y eficaz aplicación preventiva y represiva. Para ello, promueve las reformas legislativas adecuadas a las nuevas

situaciones sociales; es decir, **examina si corresponde o no tales mecanismos a las exigencias de la sociedad y propone las reformas correspondientes.** Así, surge un derecho penal dinámico, que va remozando de acuerdo con los avances de la ciencia. También, otorga a los poderes públicos las programaciones científicas concretas, que elabora en la lucha contra la delincuencia, más adecuadas para el eficaz control del delito.

d) Así, podemos establecer que una respuesta a la criminalidad no parte necesariamente de una sobre criminalización de conductas o con el aumento de las penas, sino que esta ineludiblemente merece un estudio más detallado y fundamentado por parte de todos los actores que intervienen antes, durante y después de la elaboración de una norma específica.

5.1.2. SOBRE LA FINALIDAD DE LA PENA

a) Una explicación critica de la pena parte de considerar a esta como un mal, y plantea la negación de su fundamento y la utilidad de la pena. Otras explicaciones parten de la misma premisa, pero admiten la posibilidad de comprobar cierta eficacia de la pena. Ello dependiendo de si en la realidad, respecto del ejercicio del poder penal, es posible demostrar la eficacia de los fines preventivos de la pena (prevención general y especial); entonces podrá ser posible aceptar o negar políticamente la legitimidad de la pena.

b) El Código Penal de 1991 introdujo a la legislación penal peruana normas sobre la finalidad de la pena y un nuevo sistema de penas. En este sentido, el Artículo I del Título Preliminar declara que "este Código tiene por objeto la prevención de delitos y faltas como medio protector de la persona humana y de la sociedad", y el Artículo IX del Título Preliminar expresa que "la pena tiene función preventiva, protectora y resocializadora". Por ello, podemos considerar que el Código se inscribe en la línea de una teoría unitaria aditiva de la pena y como función de esta.

c) De modo tal que la pena tiene una mezcla de proporcionalidad (como respuesta inmediata frente al delito): prevención general (reinstaurando la norma vulnerada y demostrando su importancia frente a la sociedad) y prevención especial; en tal sentido, se considera dar mayor énfasis en esta última variante por la necesidad de rehabilitación del penado, a fin de reincorporarlos a la sociedad.

5.1.3 LIMITES DE LA PENA

a) Ahora bien, se aprecia que los límites del poder penal actúan tanto en la creación de las normas penales (criminalización primaria) como en su aplicación (criminalización secundaria), pero se les suele clasificar en límites materiales o garantías penales y límites formales o garantías procesales, de persecución de ejecución. Así, dentro de los límites materiales o garantías penales debemos destacar para el presente caso lo

siguiente:

- Principio de Racionalidad y humanidad de las penas: En la actualidad se ha considerado como el pensamiento central de la ejecución penal y uno de los límites primordiales en un Estado democrático. Asimismo, **se rechazan aquellas sanciones penales que buscan mantenerse hasta la muerte de a persona.** Toda consecuencia jurídica debe terminar en algún tiempo, pero nunca debe rebasar más allá de la vida del penado ni ser perpetua, ya que implicaría admitir la existencia de una persona innecesaria.
- Principio de respuesta no contingente: Refiere a que la ley penal es una respuesta a conflictos sociales. El procedimiento para determinar los límites de la respuesta estatal **debe exigir un cuidado debate parlamentario, análisis a través de instituciones representativas y una adecuada discusión pública,** de forma tal que se ejercite una contención a la llamada administrativización del derecho penal, entendida como la proliferación incontrolada y no planificada de normas penales. La ley penal no puede ser una respuesta inmediata frente a todo tipo de conflicto social; sin embargo, esta práctica es usual en la respuesta que el Estado peruano suele realizar ante el aumento de la criminalidad.

b) Por ello, resulta importante generar correctos ámbitos de discusión, para que, sobre las bases de la investigación obtenida a través del análisis desde la óptica de la política criminal, se pueda establecer la pertinencia o no de la medida propuesta por el proyecto de ley analizado.

c) Igualmente, se debe tomar en cuenta lo señalado, a continuación, por los fundamentos jurídicos 15 y 16 de la Sentencia Plenaria Casatoria N 01/2018/CIJ/433, del 18 de Diciembre del 2018:

15. "... La pena, pues, debe responder conjuntamente a la gravedad del injusto cometido (responsabilidad por el propio hecho) y a las necesidades sociales de pena que pueda existir al momento de su imposición y durante su ejecución; y, al confirmar los valores de convivencia que dan lugar a la norma de conducta infringida, expresa un reproche de contenido ético social...".

16. Entonces, metodológicamente, como se precisó, por ejemplo, en la STCE 136/1999, del veinte de Julio, cabría examinar la proporcionalidad de una reacción penal desde tres perspectivas:

1. Desde su idoneidad el tipo penal ha de procurar la preservación de bienes o intereses que no estén constitucionalmente proscritos ni sean socialmente irrelevantes y cuando la pena sea instrumentalmente apta para dicha persecución.

2. Desde su necesidad, la pena ha de permitir alcanzar fines de protección, una pena será innecesaria, entonces, cuando a la luz del

razonamiento lógico, de datos empíricos no controvertidos y del conjunto de sanciones que el mismo legislador ha estimado necesarias para alcanzar fines de protección análogos, resulta evidente la manifiesta suficiencia de un medio alternativo menos restrictivo de derechos para la consecución igualmente eficaz de las finalidades deseadas por el legislador.

3. Desde su estricta proporcionalidad, la norma debe guardar equilibrio entre la entidad del delito y la entidad de la pena; no lo será, desde luego, cuando concurra un desequilibrio patente y excesivo o irrazonable entre la sanción y la finalidad de la norma a partir de las pautas axiológicas constitucionalmente indiscutibles y de su concreción en la propia actividad legislativa.

5.1.4. SOBRE LA CADENA PERPETUA

a) La cadena perpetua se aplica tradicional e históricamente en los delitos más graves como son el terrorismo y la violación, entre otros. Con este tipo de penas, se le quita al individuo la esperanza de vida en la sociedad y queda relegado al ambiente de la prisión, pues, de esta forma, pierde cualquier deseo por resocializarse.

b) Así, el Tribunal Constitucional señaló que "en su regulación legal actual, es intemporal; es decir, no está sujeta a límites en el tiempo, pues si tiene un comienzo, sin embargo carece de un final y en esa medida, niega la posibilidad de que el penado en algún momento pueda reincorporarse a la sociedad; por lo tanto concluye que el establecimiento de la pena de cadena perpetua solo es inconstitucional sí no se prevén mecanismos temporales de excarcelación, vía los beneficios penitenciarios u otros que tengan por objeto evitar que se trate de una pena intemporal". (Sentencia del 3 de enero del 2003, Expediente 010/2002/AI/TC).

c) Cabe recordar que, en conformidad con el fundamento de la exposición de motivos del Proyecto de Ley 2402/2017/CR, que sirvió para modificar el Artículo 173 del Código Penal e imponer cadena perpetua para la violación de menores de edad, se indicó lo siguiente: "En ese sentido, realizando una ponderación de derechos podemos establecer que el derecho a la intangibilidad sexual e indemnidad sexual de un menor de edad, se encuentra por encima del derecho a la libertad del agente activo sin importar su condición social, cultural, económica, etc.".

d) Igualmente, sobre la cadena perpetua como sanción del delito de violación de mayor de edad, pero causando su muerte, se indicó que, no obstante esta sobre criminalización o "terror del Estado" con el incremento exagerado de las penas, solo en apariencia, se aprecia como una mayor protección a la víctima, pues, en la práctica, no parece haber contribuido a una mayor eficacia preventivo general o a la mayor

tutela de los bienes jurídicos del derecho penal sexual. En los estrados Judiciales, son frecuentes los casos de delitos sexuales. Por el contrario, esta regulación simbólica sirve más como una simple salida facilista del Estado frente a la demanda social.

e) Por lo tanto, se aprecia que, aunque la cadena perpetua se justifica desde la perspectiva del reproche de conductas altamente graves o lesivas de los bienes jurídicos de inmenso peso ante la sociedad, en la realidad, esta sanción no garantiza una palpable prevención de parte de otros sujetos tentados a cometerlas y por el contrario, no cumple con la verdadera demanda de tutela jurisdiccional efectiva de las víctimas.

5.1.5. SOBRE EL DELITO DE SICARIATO

a) Dentro de los delitos contra la vida que regula nuestro Código Penal tenemos en su forma más básica al homicidio simple contenida en el Artículo 106 que sanciona al que: "*mata a otro será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de seis ni mayor de veinte años*".

b) Ahora bien, dentro de las figuras agravadas de este delito tenemos al homicidio calificado regulado por el artículo 108 del Código Penal que sanciona al homicidio en cuatro supuestos: 1. Por ferocidad, por lucro o por placer; 2. Para facilitar u ocultar otro delito; 3. Con gran crueldad o alevosía; y,4. Por fuego, explosión, veneno o por cualquier otro medio capaz de poner en peligro la vida o salud de otras personas.

c) Así tenemos que desde el texto original (y posteriores modificaciones) del Artículo 108 del Código Penal se sanciona dicha conducta con una pena privativa de la libertad no menor de quince años (es decir, al no señalar un máximo punitivo se autorizaba un marco para la determinación penal de hasta treinta y cinco años de conformidad con el Artículo 29 del Código Penal).

d) Queda claro entonces que originalmente las formas de homicidio "por encargo" o conocidas como homicidio con autor intelectual y ejecutor se encuadraban con la del homicidio calificado por lucro, pues evidentemente este tenía por finalidad la obtención de un beneficio pecuniario y era sancionado con un mínimo de 15 y un máximo de 35 años de privación de la libertad.

e) Empero, ante el incremento y especial crisis en la comisión de homicidios por encargo se generó la necesidad de regular dicha figura de forma especial y diferenciada que al del homicidio del Artículo 108 (de igual forma que en su oportunidad se hizo con la incorporación del homicidio contra victima especial del Artículo 108 A y el feminicidio del Artículo 108 B).

f) Por ello, el 27 de julio del 2015 se publicó el Decreto Legislativo 1181

que incorporó el Artículo 108 C al Código Penal bajo la figura de "sicariato" y sancionó una conducta base con la pena no menor de veinticinco años (con un máximo de treinta y cinco), elevando de este modo el mínimo punitivo en comparación al de homicidio calificado del Artículo 108). Asimismo, también generó una forma de sanción más agravada con la pena de cadena perpetua bajo 6 supuestos, que nuevamente ponen de relieve el significativo tratamiento e incremento de pena que se pensó para sancionar dicha conducta.

g) Por lo tanto, en la actualidad ya contamos con una figura especial que sanciona el sicariato (que resulta ser una forma especial o "más agravada" que la del homicidio calificado por lucro) la cual posee en sí dos modalidades configurativas, una simple sancionada con una pena mínima no menor de 25 ni mayor de 35 años de privación de la libertad, y otra con 6 supuestos que conllevan a la imposición de cadena perpetua.

h) Adicionalmente, el decreto antes señalado también incorporó la prohibición de la aplicación del derecho de gracias, amnistía, indulto y conmutación de pena para este delito, así como la prohibición de los beneficios penitenciarios de semilibertad y liberación condicional (ello en la primera y segunda disposiciones complementarias finales).

5.1.6. DE LA PROPUESTA LEGISLATIVA

a) En ese sentido, es necesario dejar sentado que los términos que contiene la exposición de motivos del presente proyecto de ley tales como: "propone incorporar"; "busca tipificar la figura del delito de sicariato"; y "necesidad de incorporar la figura jurídica del sicariato"; se encuentran amparados en un contexto al parecer no actualizado. Si bien es cierto el proyecto de ley tiene como nombre: "Ley que modifica el artículo 108-C del Código Penal, con el incremento de la pena"; en la exposición de motivos se ha realizado una descripción de la problemática que supone incorporar la figura del Sicariato, la cual como se indicó, ya existe; de manera que dicha exposición de motivos, no guarda relación con la propuesta normativa.

b) Adicionalmente, en ninguna parte de la exposición de motivos se hace una motivación para justificar el incremento de pena a cadena perpetua a pesar de que dicha figura ya cuenta con dicha sanción para casos específicos; o, en todo caso, que justifique por qué se debe sancionar con dicho máximo punitivo todos los casos de sicariato, pese a que, como se señaló, esta sanción está destinada para casos extremos y de gran daño social (cuando típicamente lesionan más de un bien jurídico, además, del de vida). Asimismo, tampoco se tomó en cuenta que el Decreto Legislativo 1181 ya contempló la restricción al acceso al derecho de gracia.

5.1.7. CONCLUSIONES

Por lo tanto, consideramos que la propuesta legislativa contenida en el Proyecto de Ley N.° 001/2021-GL resulta **no viable**, debido a lo siguiente:

5.1.7.1. La sobre criminalización e incremento punitivo de delitos no resultan ser una respuesta adecuada frente al aumento de la criminalidad, pues, muchas veces, puede derivar en una simple simbología que no tenga beneficios concretos en la práctica.

5.1.7.2. Una visión adecuada para establecer y determinar las correctas respuestas punitivas parte desde la óptica de la política criminal que exige un análisis y debate de las instituciones pertinentes.

5.1.7.3. La finalidad de la pena, si bien, nace de una retribución clásica y, actualmente, también, conlleva un mensaje que busca desincentivar el delito en la sociedad; sin embargo, no debe olvidarse que su principal objetivo es la resocialización del delincuente, que, bajo la mirada de una pena sin fin, como es la cadena perpetua, nunca se lograría.

5.1.7.4. Asimismo, dos de los límites principales del poder punitivo señalan que las penas no pueden ser inhumanas ni traspasar la vida misma de los delincuentes, así como necesariamente deben exigir un cuidado debate parlamentario, análisis a través de instituciones representativas y una adecuada discusión pública, todo lo cual no se aprecia para el caso de autos.

5.1.7.5. La motivación de la propuesta legislativa no toma en cuenta la existencia y tratamiento del vigente artículo 108-C del Código Penal y mucho menos justifica la necesidad del incremento de pena que propone (apreciando que esta se encuentra reservada para graves vulneraciones pluriofensivas, ni se justificó la ponderación o test de proporcionalidad respectiva).

5.2. MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

Mediante el oficio N° 2688-2021-JUS/SG, de fecha 23 de diciembre del 2021, el señor Manuel Eduardo Larrea Sánchez, Secretario General del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que remite copia del Informe Técnico N° 058-2021-JUS/DGAC de la Dirección General de Asuntos Criminológicos, que opina en los siguientes términos:

5.2.1 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA

El proyecto de ley tiene por objeto modificar el art. 108-C del Código Penal con la finalidad de sancionar con cadena perpetua el delito de sicariato.

La propuesta del Artículo Único del proyecto de ley puede apreciarse conforme al cuadro que se muestra a continuación:

Texto actual del Código Penal	Propuesta de modificación
Artículo 108-C.- Sicariato El que mata a otro por orden, encargo o acuerdo, con el propósito de obtener para sí opara otro un beneficio económico o de cualquier otra índole, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de veinticinco años y con inhabilitación establecida en elnumeral 6 del artículo 36, según corresponda. Las mismas penas se imponen a quien ordena, encarga, acuerda el sicariato o actúa como intermediario. Será reprimido con pena privativa de libertad de cadena perpetua si la conducta descrita enel primer párrafo se realiza: 7. Valiéndose de un menor de edad o de otro inimputable para ejecutar la conducta. 8. Para dar cumplimiento a la orden de una organización criminal. 9. Cuando en la ejecución intervienen dos o más personas. 10. Cuando las víctimas sean dos o más personas. 11. Cuando las víctimas estén comprendidas en los artículos 107 primer párrafo, 108-A y 108-B primer párrafo. 12. Cuando se utilice armas de guerra.	**Artículo 108-C.- Sicariato** El que mata a otro por orden, encargo o acuerdo, con el propósito de obtener para sí opara otro un beneficio económico o de cualquier otra índole, será reprimido con pena privativa de libertad **de cadena perpetua** y con inhabilitación establecida en el numeral 6 del artículo 36, según corresponda. Las mismas penas se imponen a quien ordena, encarga, acuerda el sicariato o actúa como intermediario. **La misma pena será aplicable al que en forma directa o por intermediación encargue u ordene la realización de este delito** **El que cometa este tipo de delito no podrá acogerse al derecho de gracia.**

5.2.1. ANÁLISIS DEL PROYECTO DE LEY:

Respecto a la fórmula legal

Afectación al principio de proporcionalidad

1. Ahora bien, de la revisión de la propuesta legislativa y contrastada con la fórmula legal actual, se advierte que esta pretendería aumentar la pena del delito de sicariato, de tal forma que resulte conminado con cadena perpetua en todas sus modalidades, sin diferenciar supuestos básicos y supuestos agravantes de ningún nivel. Esta disposición afecta el principio de proporcionalidad pues equipara el desvalor penal de acciones cometidas en circunstancias de connotación grave, de mayor daño social y de infame motivación delictiva, con el desvalor de actuaciones que no se perpetran en dicho tipo de circunstancias.
2. El profesor Diez Ripollés, destacado exponente del estudio de la racionalidad de las leyes penales, precisa que el "principio de proporcionalidad en sentido estricto se ocupa de establecer un enlace material entre el delito y la consecuencia jurídica basado en el valor de justicia del Estado de derecho, en la interdicción de laarbitrariedad y en la dignidad de la persona" [1] . En la presente propuesta se transgrede tal correspondencia jurídica.

3. Como se puede advertir de la fórmula legal actual, el delito de sicariato prevé una modalidad base sancionada hasta con 25 años de pena privativa de la libertad; y, también, su agravante que permite que la sanción a imponerse sea hasta la cadenaperpetua, siempre que el delito se realice bajo 6 circunstancias específicas, que le otorgan un mayor desvalor.

4. Por su parte, el Tribunal Constitucional, en su sentencia recaída en el expediente N°0014-2006-HC/TC, ha establecido respecto al principio de proporcionalidad en la tarea legislativa:

> "[...] las penas establecidas por los legisladores aplicables a las conductas delictivas no deberían ser tan onerosas que superen la propia gravedaddel delito cometido, ni tan leves que signifiquen una infrapenalizaciòn de los delitos y una desvalorización de los bienes jurídicos protegidos que fueren afectados. [...] toda pena debe guardar proporción y correspondencia con el nivel de reprochabilidad jurídica y social del acto
> sancionado [...]." [2] (subrayado propio)

5. En ese marco, la cadena perpetua planteada tergiversa las correspondencias y los intervalos penales que se advierten en la fórmula legal vigente para diferenciar un tipo base de sus agravantes. La cadena perpetua -tal cual la fórmula vigente- debe responder a casos con un gran daño social. Paradójicamente, su imposición genérica para todos los supuestos del delito de sicariato infravalora las circunstancias agravantes y sobrevalora el tipo base, a la vez. A saber, afecta la proporcionalidad penal.

Se debilita la eventual capacidad de disuasión de la norma

[2] Fundamento 35. Consulta en https://tc.gob.pe/ jurisprudencia/ 2007/00014-2006-AI.pdf

6. La equiparación de la pena de cadena perpetua para todos los supuestos del delito de sicariato incide en la dirección, sentido y magnitud de disuasión que expresa la norma penal. El mensaje de censura que reciben los actores delictivos y potencialesactores delictivos es que la pena será igual de grave sin importar el daño producidocon su conducta.

7. Tal percepción instiga a que estas personas no reculen y ni tengan reserva en la producción de daños aún más graves ya que el desenlace, bajo su lectura, será el mismo. A saber, involucrar menores de edad, afectar a víctimas especialmente vulnerables, generar sufrimiento excesivo u otra circunstancia grave se valorará exactamente que la modalidad básica, pues no existiría mayor censura frente a las mismas. En ese marco, se considera que la presente propuesta debilita la capacidadde disuasión de la norma.

Asistematicidad y duplicidad regulativa

8. En cuanto a la prohibición del derecho a gracia de las personas condenadas por el delito de sicariato, resulta inapropiado establecer dicha medida como consecuenciajurídica en el código penal. En este cuerpo normativo de régimen sancionatorio las conminaciones de los tipos penales de su parte especial solo pueden hacer referencia a las consecuencias jurídicas establecidas en su parte general, a saber, los diversos tipos de pena señalados en su artículo 28. La prohibición del derecho a gracia no forma parte de esa terna de medidas, por lo que su incorporación genera asistematicidad normativa.

9. De otro lado, cabe precisar que la primera disposición complementaria final del Decreto Legislativo N° 1181, Decreto Legislativo que incorpora en el Código Penal el delito de sicariato (DL 1181), establece expresamente que "queda prohibido el derecho de gracia, amnistía, indulto y conmutación de la pena para los delitos previstos en los artículos 108-C y 108-D (delitos de sicariato y de conspiración para el sicariato)". En ese sentido, la prohibición del derecho a gracia en la fórmula legal del tipo penal de sicariato generaría duplicidad regulativa.

Respecto a la exposición de motivos

Imprecisión en el pedido de criminalización autónoma del sicariato

10. La exposición de motivos indica expresamente que se debe incorporar el delito de sicariato como delito autónomo en el Código Penal. Esta incorporación resulta innecesaria pues dicho delito ya forma parte del código penal desde julio de 2015. Su incorporación como tipo penal autónomo se realizó a través del DL 1181 y fue ubicado en el artículo 108-C del referido cuerpo normativo. En ese sentido, es posible afirmar que el argumento de la exposición de motivos es impreciso.

No se exponen fuentes de información cuantitativa

11. La exposición de motivos expresa particular preocupación por el aumento del delitode sicariato en los últimos años. En la propuesta se indica que desde el 2020 hasta este año existe un aumento del 400% de casos por el delito de sicariato, sin embargo, no se señala la fuente académica o institucional para dar respaldo a dicha afirmación.

12. Sobre lo señalado, actualmente, se cuenta con información pública y sistematizada hasta el año 2018 en los informes realizados por el Instituto Nacional de Estadísticae Información (INEI) sobre homicidios en el país. La información elaborada señala que desde el 2015 el número de casos registrados en instancias administrativas, sinllegar necesariamente a una condena, mantienen un comportamiento regular. Así, se puede observar en que en el año 2015 se observaron 97 casos denunciados, en el2016 cerca de 102 casos denunciados, en el 2017 se tomaron denuncias por 93 casosy en el 2018 se observaron 45 casos[3]. Dicho recuento oficial permite advertir que eldiagnóstico y las conclusiones de la exposición carecen de precisión cuantitativa.

Imprecisión en la calificación del sicariato como delito de lesa humanidad

13. Es impreciso calificar per se al sicariato como crimen de lesa humanidad. Conforme al artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, efectivamente, el asesinato -incluido el sicariato- puede ser considerado un delito de lesa humanidad, pero siempre y cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil. El sicariato, jurídicamente, no es un crimen de lesa humanidad en cualquier circunstancia. Esta afirmación resulta imprecisa en la exposición de motivos del presente proyecto.

II.- CONCLUSIÓN

El presente proyecto de ley pretende modificar el artículo 108-C del código penal, a efectosde sancionar con cadena perpetua la comisión del delito de sicariato. Sobre ello, se considera que la propuesta transgrede el principio de proporcionalidad, debilita la capacidad de disuasión de la norma penal, genera asistematicidad, genera duplicidad regulatoria y expone imprecisiones normativas, conceptuales e informativas en su exposición de motivos

Por lo señalado, esta Dirección considera que el Proyecto de Ley Nº 001/2021-GL, "Proyecto de Ley que modifica el artículo 108-C del Código Penal con el incremento de la pena", resulta **NO VIABLE**.

[3] Instituto Nacional de Estadística e Informática, Homicidios en el Perú, contándolos uno a uno 2011-2018 – Informe estadístico N° 7, INEI, Lima, 2020, p. 40. Consulta: https://www.inei.gob.pe/media/ MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1731/libro.pdf

5.3. DEFENSORIA DEL PUEBLO

Mediante Oficio N° 358-2022/DP-PAD, de fecha 14 de junio del 2022, la señora Alicia Abanto Cabanillas, Primera Adjunta (e) de la DEFENSORIA DEL PUEBLO, remite el informe Jurídico Especializado Nº 002 – 2022- DP/ADHPD, elaborado por el programa de Asuntos Penales y Penitenciarios de la Defensoría del pueblo que, emite opinión en los siguientes términos:

5.3.1. Análisis de la propuesta legislativa

PROPUESTA LEGISLATIVA
LEY QUE PROPONE MODIFICAR EL ARTÍCULO 108-C DEL CÓDIGO PENAL EN EL INCREMENTO DE LA PENA. **Artículo Único. – Modifíquese el artículo 108-C cuyo texto queda redactado de la siguiente manera.** **"Artículo 108-C Sicariato.** El que mata a otro por orden, encargo o acuerdo, con el propósito de obtener para si o para otro un beneficio económico o de cualquier otra índole, será reprimido con pena privativa de libertad de **cadena perpetua** y con habilitación establecida en el numeral 6 del artículo 36", según corresponda. Las mismas penas se imponen a quien ordena, encarga, acuerda el sicariato o actúa como intermediario. **La misma pena será aplicable al que en forma directa o por intermediación encargue u ordene la realización de este delito.** **El que cometa este tipo de delito no podrá acogerse al derecho de gracia".**

5.3.1.1. La iniciativa legislativa describe la realidad que vive nuestro país, respecto a la inseguridad ciudadana, el cual se agrava por la comisión del delito de sicariato, el cual ha cobrado un sin número de vidas y ponen en zozobra a la población. A partir de esta realidad.

5.3.1.2. En ese sentido, el presente proyecto normativo, propone modificar al Código Penal, respecto al delito de homicidio calificado bajo la modalidad de Sicariato, es decir el homicidio por encargo o sueldo; fenómeno criminal, que viene perjudicando terriblemente a la sociedad; en ese contexto, la propuesta normativa propugna el incremento de la pena, para los autores del delito de sicarito como un efecto disuasivo ante dicho

problema criminal.

5.3.1.3. De lo descrito, en el proyecto normativo no obra un análisis del delito de sicariato, donde ya se impone la pena privativa de libertad de cadena perpetua cuando se cometa con las agravantes descritas en la ley, pues de la exposición de motivos, se aprecia insuficientes argumentos y análisis jurídicos que consolide la modificación de la citada norma.

De la misma forma no existe un análisis de los verbos rectores que se pretenden incorporar específicamente (tercer párrafo) y si estos se contraponen o son similares a lo ya descrito en el tipo penal vigente, aspectos que ameritan un mayor análisis; más aún, cuando se establecería una derogación tacita de las agravantes descritas en la norma.

5.3.1.4. Ahora, el artículo 29° del código penal, establece que la pena privativa de libertad puede ser temporal o de cadena perpetua. En el primer caso tendrá una duración mínima de dos días y una máxima de treinta y cinco años, a la fecha el código penal tipifica algunas agravantes de la pena, para que el juez aplique la cadena perpetua, como es en el delito de sicariato donde se aplica la cadena perpetuo si se mata a un menor de edad, si hay pertenencia a una organización criminal, si participan dos o más sicarios en la comisión de un hecho delictivo, si se mata a dos o más personas, si se utilizan armas de guerra entre otros[4].

5.3.1.5. De lo descrito, es necesario indicar que la pena de cadena perpetua, no sólo depende de los límites a su intemporalidad, sino fundamentalmente de la forma de ejecución de la pena, pues este sería un trato cruel, inhumano y degradante debido a las condiciones deplorables en las que se hallan las prisiones peruanas en la actualidad, en especial aquellas denominadas de

---

[4] **Artículo 108-C.- Sicariato**
El que mata a otro por orden, encargo o acuerdo, con el propósito de obtener para sí o para otro un beneficio económico o de cualquier otra índole, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de veinticinco años y con inhabilitación establecida en el numeral 6 del artículo 36, según corresponda.
Las mismas penas se imponen a quien ordena, encarga, acuerda el sicariato o actúa como intermediario.
Será reprimido con pena privativa de libertad de cadena perpetua si la conducta descrita en el primer párrafo se realiza:
1. Valiéndose de un menor de edad o de otro inimputable para ejecutarla conducta,
2. Para dar cumplimiento ala orden de una organización criminal.
3. Cuando en la ejecución intervienen dos o más personas.
4. Cuando las víctimas sean dos o más personas
5. Cuando las víctimas estén comprendidas en los artículos 107 primer párrafo, 108-A y 108-8 primer párrafo.
6. Cuando se utilice armas de guerra.

"máxima seguridad" reservadas para el cumplimiento de condenas a cadena perpetua, los cuales son centros de alta inseguridad y máxima densidad, cuya realidad fue constatada por la Defensoría del Pueblo y el cual fue materia del Informe Defensorial N° 113 sobre la Supervisión Integral el Sistema Penitenciario, el cual trajo como consecuencia el cierre de algunos establecimientos penales y el traslado de internos debido al hacinamiento y tratos degradantes que afectan la integridad de una persona.

5.3.1.6. En ese sentido, el estado debe promover una política criminal personalista que excluya la cadena perpetua y las penas privativas de libertad de larga duración, por ende, lograr un Derecho Penal racional respetuoso de los derechos humanos que permita superar definitivamente las implicancias de penas como la cadena perpetua con instrumentos jurídicos internacionales que protegen derechos humanos, con el inc. 22) del Artículo 139° de la Constitución Política y el Artículo IX del Título Preliminar del Código Penal.

5.3.1.7. En ese sentido, se advierte, que la solución respecto a los actos criminales que se cometen en nuestra sociedad, no se resuelve con crear una legislación totalmente represiva; más aún, cuando existen agravantes para imponer ya esta clase de pena privativa de libertad al delito de sicariato, pues lo que se requiere en la actualidad, es mejorar las políticas de prevención, de investigación e inteligencia policial, además de invertir en equipos y peritos que fortalezcan la operatoria policial, pues, por el contrario, de proseguirse en este tipo de políticas represivas, lo único que se hará es coadyuvar al hacinamiento de los penales. Asimismo, es de considerar, que la finalidad del régimen penitenciario exige la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad, el cual provee una fecha de culminación de la pena de cadena perpetua, además de las condiciones en las que ésta se ha de cumplir; teniendo como fundamento la Constitución Política del Perú, el cual prohíbe la imposición de penas que supongan tratos crueles y degradantes; de la misma forma, no existe argumentos por el cual en esta clase de delitos los procesados o condenados no podrían acogerse al derecho de gracia.

5.3.1.8. Finalmente, de los argumentos establecidos, se requiere de un mayor análisis que establezca la idoneidad, proporcionalidad y necesidad, respecto al endurecimiento de las penas, conforme lo impone el artículo 2 de la Ley N° 26889[5]; más aún, cuando es de

[5] Ley Marco para la Producción y Sistematización Legislativa Ley N° 26889.

conocimiento internacional que las penas no tienen efectos disuasivos, pues la temporalidad y otros factores relacionados a ella, no son determinantes para la ejecución de un delito, además de no generar un efecto preventivo; pues para ello, se debe de trabajar en el origen del delito, mas no en su consecuencia.

5.3.2. Conclusión

De las consideraciones expuestas, la Defensoría del Pueblo **emite opinión en sentido desfavorable**, respecto de la propuesta contenida en el presente proyecto normativo, atendiendo que carece de un análisis jurídico del tipo penal descrito en el artículo 2° de la Ley N° 26889, referente al sustento de la exposición de motivos, el cual requiere un mayor análisis técnico jurídico, que establezca la idoneidad, proporcionalidad y necesidad, respecto al endurecimiento de las penas; más aún, cuando mediante esta propuesta modificatoria, existiría una derogación tacita respecto a las agravantes descritas en la norma actual, aspectos técnicos que tampoco han sido analizados.

Finalmente, es de mencionar que, en el derecho penal internacional, el incremento de las penas no tiene efectos disuasivos, pues la temporalidad y otros factores relacionados a ella, no son determinantes para la ejecución de un delito, además de no generar un efecto preventivo; pues para ello, se debe de trabajar en los orígenes del delito, mas no en su consecuencia.

VII. ANALISIS COSTO BENEFICIO:

No es aplicable a la presente iniciativa el análisis costo beneficio, por cuanto del análisis efectuado resulta no viable.

VIII. CONCLUSIONES

Como ya se ha dicho precedentemente, no es necesaria a modificación del artículo 108-C del Código Penal, toda vez que esta regula de manera taxativa los alcances del delito de sicarito con pena mínima de veinticinco (25) años y de cadena perpetua como figura agravada, los cuales quedan así determinadas.

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: CERRON ROJAS Waldemar Jose FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 28/12/2022 13:41:39-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: VENTURA ANGEL Hector Jose FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 28/12/2022 10:42:39-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: LUQUE IBARRA Ruth FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 28/12/2022 14:37:17-0500

DICTAMEN RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY N° 0001/2021-G.L, QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 108-C DEL CÓDIGO PENAL, CON EL INCREMENTO DE LA PENA

IX. RECOMENDACION

Firmado digitalmente por: SOTO PALACIOS Wilson FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 27/12/2022 17:18:24-0500

Firmado digitalmente por: LIMACHI QUISPE Nieves Esmeralda FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 28/12/2022 12:03:59-0500

Por las razones expuestas, la comisión de Justicia y Derechos Humanos de conformidad con el literal c) del artículo 70 del Reglamento Interno del Congreso de la Republica, recomienda la NO APROBACION del **Proyecto de Ley 0001/2021-GL** y su remisión al archivo.

Dese cuenta
Sala de Comisiones.
Lima, 23 de noviembre de 2022.

Firmado digitalmente por: BALCAZAR ZELADA Jose Maria FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 21/12/2022 14:58:07-0500

Firmado digitalmente por: GONZA CASTILLO Américo FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 19/12/2022 15:58:59-0500

Firmado digitalmente por: PAREDES GONZALES Alex Antonio FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 19/12/2022 16:04:14-0500

Firmado digitalmente por: JUAREZ GALLEGOS Carmen Patricia FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 22/12/2022 09:54:42-0500

Firmado digitalmente por: GUERRA GARCIA CAMPOS Hernando FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 22/12/2022 10:43:21-0500

Firmado digitalmente por: ALVA PRIETO Maria Del Carmen FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 22/12/2022 11:28:36-0500

Firmado digitalmente por: ECHAIZ DE NUÑEZ IZAGA Gladys Margot FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 22/12/2022 15:35:50-0500

Firmado digitalmente por: MORANTE FIGARI Jorge Alberto FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 23/12/2022 16:26:44-0500

Firmado digitalmente por: MOYANO DELGADO Martha Lupe FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 27/12/2022 16:30:19-0500

CONSEJO DIRECTIVO DEL
CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Lima, 24 **de** marzo **de** 2023

Con acuerdo del Consejo Directivo,
pase al archivo. —

.....
HUGO F. ROVIRA ZAGAL
Director General Parlamentario
CONGRESO DE LA REPÚBLICA

mp.dictamenes@congreso.gob.pe

De: mesadepartesvirtual@congreso.gob.pe
Enviado el: miércoles, 28 de diciembre de 2022 16:37
Para: syahuana@congreso.gob.pe
Asunto: Mensaje Usuario Interno - Dictamenes
Datos adjuntos: c8e6dee3b7f29d83f13de5d0c8f439db.pdf

[Solicitante]: syahuana@congreso.gob.pe
[Asunto]: Mensaje Usuario Interno - Dictamenes
[Mensaje]: EN LA DECIMA SESION ORDINARIA DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2022, SE ACORDO LA DISPENSA DEL TRAMITE DE LECTURA Y APROBACION DEL ACTA PARA EJECUTAR LO ACORDADO. DICTAMEN RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY N° 0001/2021-G.L, QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 108-C DEL CÓDIGO PENAL, CON EL INCREMENTO DE LA PENA.
[Fecha]: 2022-12-28 16:36:49
[IP]: 94.188.207.218

Su mensaje ha sido recibido.
Por favor, **NO responda a este mensaje**, es un envío automático de una cuenta no supervisada.